

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1380 DE 2019

10 OCT 2019

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO Y
TRANSPARENCIA (E)**

En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las conferidas en el artículo 108 y en el literal b) del numeral 5 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con lo previsto en el numeral 9º del artículo 11.2.1.4.10 del Decreto 2555 de 2010 y con lo consagrado en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 y en el Decreto 4334 de 2008 en concordancia con los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que mediante la Resolución número 0912 del 10 de julio de 2019, la Superintendencia Financiera de Colombia, a través del Superintendente Delegado para Protección al Consumidor Financiero y Transparencia, ordenó, entre otras, *"al señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072, la **SUSPENSIÓN INMEDIATA** de las actividades que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución, bajo el apremio de multas sucesivas que podrán oscilar entre uno (1) y quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 del ECSF, en armonía con lo consagrado en el artículo 90 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"*

SEGUNDO. Que el referido acto administrativo fue notificado personalmente el día 25 de julio de 2019 al señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO, tal y como figura en la constancia¹ suscrita para el efecto y que obra en el expediente de la actuación administrativa.

TERCERO. Que estando dentro del término legal, en escrito presentado personalmente ante esta Superintendencia y radicado bajo el número 2018129298-343-000 del 9 de agosto de 2019, el señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO interpuso recurso de reposición contra la citada resolución y solicitó *"se revoque la resolución 0912 de 2019"*.

CUARTO. Que en el recurso de reposición presentado, el señor GALVIS FAJARDO no aportó ni solicitó la incorporación de medios probatorios como sustento de los argumentos propuestos.

QUINTO: Que a continuación, se transcriben los motivos de inconformidad invocados por la parte recurrente frente al referido acto administrativo, en el mismo orden en que fueron expuestos, seguidos de las consideraciones de esta Superintendencia frente a cada uno de ellos.

5.1. Argumentos del recurrente frente a la actividad comercial desarrollada y el acervo probatorio presentado en la Resolución 0912 de 2019.

Los argumentos del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO fueron presentados en cinco acápites, para lo cual se abordará cada uno de manera independiente. A continuación, se transcriben los primeros tres numerales en donde se refieren aspectos relativos a la actividad comercial por él desarrollada, el conocimiento de los hechos, la

¹ Radicado 2018129298-335-000-111

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

actuación administrativa adelantada y el acervo probatorio presentado en la Resolución 0912 de 2019. Veamos su contenido:

(...)

"1. En primer lugar quiero manifestar que soy Ingeniero Eléctrico, con opción de Administración de Empresas y con Especialización en Finanzas y Mercado de capitales. Con experiencia de más de 19 años en el mercado de valores. Tengo en mi haber el diplomado de Operación Bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia.

Inicie mi actividad comercial liberal, prestando servicios de asesoría en inversiones en el mercado de capitales a aquellas personas que tenían interés de ingresar a este y obtener mejores rendimientos. Mi servicio básicamente consistía en invertir los dineros o recursos que se me entregaban por parte de las personas interesadas en el mercado colombiano de renta fija y renta variable, en el cual podía ofrecer tasas variables entre el 2.7% al 1.6 % mes vencido desde el año 2002 al 2016, tasas que variaban según el movimiento de la (sic) tasas de referencia del Banco de la República, las tasas interbancarias y tasas de usura.

Todas las personas con las que trabajaba tenían pleno conocimiento y eran advertidas de que se invertía dentro del mercado de valores colombiano a través de firmas comisionistas de bolsa, a través de una sola cuenta que era manejada por mi como inversionista profesional; igualmente eran conscientes de los riesgos bursátiles y adicional se firmaba un pagaré ante notario en el cual se describía el servicio que se les prestaba y su contraprestación. Por tanto, como puede verse, el compromiso de pago de los recursos invertidos proviene de los rendimientos derivados de una actividad legal ejecutada a través de una comisionista de bolsa.

Las tasas de interés ofrecidas eran pactadas entre la persona interesada en invertir y yo en un rango según el tiempo económico de la época. El promedio de tasas a los acreedores era del 2.0% mensual una tasa totalmente razonable en el mercado de valores.

Todos sabemos que el mercado bursátil es un mercado especulativo, pues si es manejado con personas calificadas como las comisionistas e inversionistas profesionales como yo, se pueden ofrecer tasas variables mensuales descritas anteriormente, además las ganancias ofrecidas se derivaban de negocios identificables y comprobables producto de una actividad legal de donde provenía el pago de rendimientos y la devolución de capital.

Por lo anterior, carece de asidero lo planteado en el numeral TERCERO Y CUARTO de la Resolución, pues las operaciones realizadas y los rendimientos ofrecidos tienen una explicación financiera razonable, ya que de manera voluntaria y en aras de incursiones en el mercado de capitales, incipiente para aquella época, la entrega de los dineros por estas personas era para realizar inversiones a través de comisionistas de bolsa y un inversionista profesional, actividad completamente legal, de la que se obtendría un rendimiento razonable y acorde con el resultado de los negocios allí realizados.

Como se demostrará más adelante, TODOS los acreedores recibieron una contraprestación al servicio que les prestaba con el pago de capital e intereses que se hacía mensualmente durante años, desde el 2002 al 2016 nunca se incumplió la contraprestación y al 75% por ciento de los acreedores se les pagó el capital e intereses prometidos y solo el 12.5% tiene un saldo vigente. Al otro 12.5% se les entregó proporcionalmente la liquidación de mi patrimonio con acurdo de pago y entregando mis acciones que poseía en HOTELES GMF S.A.S.

Por otra parte, a las personas que se unieron a la supuesta queja YA SE LES HA PAGADO EL CAPITAL y más. Estas personas quieren que nuevamente se les pague el capital, OCULTANDO LA VERDAD, dando falso testimonio y omitiendo todos los hechos, sobre todo las cantidades que me entregaron, y, peor aún, callando la información sobre los pagos que se les han hecho a lo largo de todos estos años. Por lo tanto, engañan a la comisión investigadora y la propia Superintendencia Financiera, haciéndole creer que existen pasivos no pagados.

Situación que al parecer no fue verificada por la comisión, pues bastaba un estudio patrimonial de estas personas o trazabilidad de los dineros entregados para evidenciar que faltaban a la verdad y que el supuesto

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

pasivo no sobrepasaba el 50% de mi patrimonio. En otras palabras, no existió una investigación objetiva en el presente asunto.

Debo señalar que la comisión, amparándose en la supuesta reserva, nunca me quiso dar información de los supuestos hechos de captación masiva de dineros del público y cuales eran las personas que hacían éstas manifestaciones, frente a las que podría haber ofrecido información pertinente, coartándome así mi derecho de defensa, pues solo me vine a enterar de estos hechos con la resolución que se recurre, y aun que se me solicitó cierta información, nunca se me permitió conocer de manera clara y precisa sobre lo que se acusaba, como lo exige el debido proceso y mis garantías constitucionales".

2. Respecto del conocimiento de los hechos y de la actuación administrativa desarrollada, debo señalar que las circunstancias de tiempo, modo y lugar allí plasmados se encuentran alejadas de la realidad y demuestran la falta de corroboración de las manifestaciones mendaces de los quejosos.

Falta al deber de investigación objetiva la comisión al omitir informármeme sobre la comunicación radicada 2018090741 donde se "informa" de una posible captación no autorizada de dineros del público de forma masiva y habitual, pues claramente me era imposible defenderme de algo desconocido, violándome así el derecho al debido proceso, insisto.


Así, con relación a lo sostenido en el numeral DÉCIMO de la Resolución, debo manifestar que jamás presenté un portafolio de inversión a varios ciudadanos (la comisión investigativa no tiene pruebas del supuesto portafolio de inversión o cartera de valores de diferentes activos o instrumentos financieros como acciones de diferentes empresas, bonos, opciones, o cualquier título valor a algún acreedor), solo prestaba UN SERVICIO a ciertas personas que estaban interesadas en invertir en el mercado de valores colombiano, pero que tenían un capital muy pequeño para ello, y pactábamos una tasa de interés variable durante un periodo de tiempo. Esta tasa estaba dada por las condiciones económicas de ese instante de tiempo influenciadas por el estado del mercado (sic) valores. Esto se resumía en un documento crediticio o contrato pagaré, donde quedaba constancia del dinero a invertir. El cual, para tranquilidad de las personas protocolizado ante notario y firmado por las partes.

El dinero que se deseaba invertir se consignaba en una comisionista de bolsa (entidades vigiladas por la Superfinanciera) y de ahí YO impartía, como inversionista profesional, órdenes de compra y venta de valores para obtener una utilidad (o pérdida), la cual se pagaba de forma mensual, semestral o anual según los acuerdos con el acreedor.

Ahora bien, las ganancias ofrecidas o rendimientos no son una "rentabilidad fabulosa" sino el producto de una actividad legal como es la inversión en bolsa a través de una comisionista, que a través de proyecciones y el monto manejado en la cuenta se refleja en un porcentaje de la inversión y/o la tasa de interés pactada.

Las personas a las que les ofrecí este servicio no son ningunos incautos, como quieren hacerlo ver ante la comisión, estos recurrían a mí en forma libre, jamás publicité o instigué a las personas, yo di a conocer mi servicio en una charla personal y comentaba todos los riesgos y beneficios y la persona tomaba la decisión de realizar su inversión o no. Son personas adultas capaces con las que durante varios años teníamos un negocio comercial y ahora lo único que quieren es verse bien ante la comisión; cómo es posible que tengamos una relación comercial durante 5, 7, 9 o más años, que al final se terminal la relación y quieren reclamarme QUE NUEVAMENTE LES PAGUE el dinero que ya se les pago como lo he venido diciendo y adelante se demostrará.

Ahora bien, evidencia la falta de investigación objetiva e integral por parte de la comisión el hecho de que los documentos que se aportan para enmarcar la captación masiva y habitual de dineros datan del año 2007, publicidad que fue eliminada ese mismo año y solo se le entregó a tres personas con anterioridad al 2008 cuando se expidiera el Decreto 4334 de 2008, Ley 1902 de 2018, decreto 2555 de 2010. La comisión NO HA PROBADO, no podrá hacerlo, que a todos los denunciantes o al menos a más de 4 personas se les haya entregado dicha publicidad.



Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

Con relación a la suma denunciada en la fiscalía se dice que es de \$1.553.000.500, sin embargo, lo cierto es que la suma es negativa -627.000.000 es decir en promedio todos recibieron su capital y a un (sic) más tuvieron utilidades, situación que se demostrará más adelante y que de haberse permitido conocer el contenido de la queja hubiera aportado a la comisión.

Ahora bien, es totalmente temerario pretender involucrar a la empresa HOTELES GMF S.A.S. con mis negocios particulares, la única relación posible esta dada por cuanto aparte que ya se ha pagado el capital e intereses para la mayoría de mis acreedores, decidí entregar adicionalmente mis acciones en la empresa Hoteles GMF S.A.S para cubrir la diferencia que hubiera y en otros casos como contraprestación de intereses no recibidos en el pasado.

El proyecto de desarrollo constructivo que se adelanta, como todos, tarda varios años y las personas que aceptaron los acuerdos, en pleno uso de sus facultades ante notario público, deberían ir a las asambleas de la empresa y enterarse de cómo va el proyecto y el tiempo que esta toma en ejecutarse, así podrán darse cuenta de la seriedad del mismo. Además, las personas que tienen acciones de HOTELES GMF S.A.S. deben mirar el libro de accionistas su correcta inscripción. (Muy extraño que la comisión agregue este punto en esta resolución cuando la misma comisión solicitó el libro de accionistas de la sociedad HOTELES GMF S.A.S y pudo constatar que las personas están correctamente inscritas, lo que prueba el sesgo y falta de investigación objetiva.)

Finalmente, como lo he venido diciendo y se concreta en el numeral DÉCIMO SEGUNDO, la comisión notificó el inicio de la actuación administrativa **pero impidió el acceso a la misma**, no permitió conocer los hechos denunciados ni las pruebas aportadas por los quejosos para sustentar los mismos, por ello se coartó el derecho de defensa y debido proceso, pues precisamente para ejercer una defensa se debe tener conocimiento de lo que se me ataca o acusa, es una cuestión de sentido común, así que **NUNCA SE ME PERMITIÓ EJERCER ESTE DERECHO**.

La comisión enmascara como derecho a entregar toda la documentación e información que considere pertinente para el mejor entendimiento de las actividades que realiza, cuando precisamente la pertinencia de un medio de prueba, evidencia o información se predica del que se refiere directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la conducta que se acusa o investiga, por lo que era imposible ejercer mi derecho de defensa sin conocer estos hechos, razón más que suficiente para evidenciar la vulneración de mis derechos fundamentales y **PREDICAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN OBJETO DE ESTE RECURSO DESDE EL MISMO ACTO DE INICIO DE LA ACTUACIÓN**.

No puede pasarse por alto, ya que evidencia la ligereza de la investigación, que la comisión afirma que actualmente soy accionista de HOTELES GMF S.A.S., lo cual es falso y la Superintendencia Financiera debe corregir esta equivocación en su Resolución, como consta en el libro de accionistas que la comisión tiene en su poder y al parecer omitió voluntariamente observar.

3. Frente al acervo probatorio, el cual se impidió conocer en el momento oportuno, como se ha expuesto, conviene señalar que en el "13.1.1 "Portafolio de inversión" la tarjeta de presentación aportada por la comisión de investigación es un tarjeta del año 2007 (sic) y que fue desechada desde el año 2008, lo que podría haberse constatado verificando que la dirección y teléfonos no son vigentes y están inactivos hace muchos años. Ni siquiera el correo electrónico es vigente. Por lo tanto, es completamente FALSO que actualmente me presente con esa tarjeta; ¿convendría saber a cuántos clientes se les entregó esta tarjeta, en qué año y como la comisión corroboró este hecho, o será otro indicativo de la ausencia de investigación objetiva?

Por otra parte, el brochure con que cuenta la comisión de investigación fue aportado por UNA sola persona y es del año 2007 (Como se puede constatar en la hoja 27 de la resolución). Ese brochure solo se entregó para máximo 3 personas y después en el año 2008, luego de la normatividad sobre captación masiva de dineros del público, fue retirado y no se volvió a entregar a ninguna persona, por lo que de esta "prueba o evidencia" la comisión NO PUEDE probar que es una publicidad en masa ni mucho menos.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

La misma situación ocurre respecto del "13.1.2 Plan de comisiones por referir nuevos inversionistas" pues el mentado brochure no pasó de ser una idea inicial de negocio que se desechó una vez se promulgó la normatividad sobre captación del 2008. Brochure que, insisto, no fue entregado a personas en general o innominadas.

Ese brochure es totalmente inoperante y no se puede basar un acervo probatorio en un documento que no tiene vigencia desde el año 2007 cuando no estaba vigente el decreto 4334 de 2008, decreto 2555 de 2010, decreto 1068 del 2015, Ley 1902 de 2018.

Respecto de "13.1.3 Garantías" debo decir lo mismo, solo tuvo vigencia durante el 2007 sin embargo debe decirse que el dinero de los inversionistas estaba seguro, tanto así que, como probaré mas adelante, se devolvió el dinero al 75% de los acreedores y la deuda faltante del otro 25% se pagó con mi patrimonio.

Frente al punto "13.2 De la información allegada a la presente actuación por los acreedores del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO" debe resaltarse que la comisión investigadora al parecer no verificó, ni los supuestos acreedores señalan de manera clara o anexan pruebas de cuánto dinero fue que me entregaron, en qué fecha y cómo fue la forma de entrega del dinero, circunstancias de tiempo, modo y lugar fundamentales para sustentar este proceso administrativo.

El sesgo de la comisión investigadora es evidente, pues da por cierto lo mencionado por los quejosos sin verificar sus dichos o contrastarlos con prueba documental para determinar si la información dada es falsa o inexacta, como efectivamente lo demostraré.

Y es que ante la presión y persecución de un grupo de antiguos inversionistas a quienes por años les ofrecí mis servicios sin contratiempos ni queja alguna, pero que ante la adversidad decidieron denunciarme, terminé firmando (sin realizar un análisis detallado de las cuentas de cada persona que mostraba que a más del 75 % se les canceló al menos el 100% del dinero que me entregaron para invertir) los tan mencionados ACUERDOS DE PAGO. Es decir, entregué mis acciones en la sociedad HOTELES GMF S.A.S sin saber detalladamente el estado actual de cada inversionista a quien terminé tratando de acreedor" (...)

5.1.1. Consideraciones de la Superintendencia Financiera de Colombia

Esta Superintendencia encuentra que en el argumento por usted planteado parte de la afirmación sobre el ejercicio de la actividad comercial desarrollada entre el 2002 y el 2016, consistente en la asesoría e inversión en el mercado de capitales de recursos entregados por terceras personas interesados en el mercado de renta fija y renta variable, las cuales realizaba a través de cuentas abiertas a su nombre en firmas comisionistas de bolsa, para lo cual aduce que ostentaba la calidad de "inversionista profesional"; a esos terceros les firmaba un "PAGARE" ante notario en donde usted "describía el servicio que se les prestaba y su contraprestación". A su vez afirma que el compromiso de pago de los recursos invertidos provenía de los rendimientos originados a través de una comisionista de bolsa a la que usted le impartía órdenes de compra y venta de valores para obtener una "utilidad o pérdida" lo que le permitía ofrecer a sus inversionistas tasas variables.

En virtud de dicha actividad que cataloga como "completamente legal" sostiene que se generaron los rendimientos reconocidos y pagados a los acreedores, justificando así la "explicación financiera razonable de estos recursos", dado que los dineros entregados por terceros los utilizó "para realizar inversiones a través de comisionistas de bolsa", a partir de esta actividad afirma que los acreedores recibieron la "contraprestación al servicio que les prestaba", esto es, el pago de capital e intereses.

En el mismo sentido manifiesta haber realizado el pago de capital e intereses al "75% de sus acreedores y solo el 12.5% tiene un saldo vigente" a quienes mediante un acuerdo de pago se les entregó acciones de la sociedad HOTELES GMF S.A.S. Debido a este supuesto pago, cataloga como de "falso testimonio" y "manifestaciones mendaces" a quienes dieron su versión a la comisión investigadora, en el sentido de señalar que estas personas omitieron hechos para "hacer creer"

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

la existencia de pasivos no pagados, y sostiene que "YA SE LES HA PAGADO EL CAPITAL y más" con lo cual se podría determinar que el "supuesto pasivo" no sobrepasaba el 50% de su patrimonio.

Para abordar este tema, es necesario aclarar el concepto tanto de la actividad comercial descrita como la calidad de "inversionista profesional" de cara a lo dispuesto en el contexto legal vigente, pues, a partir de sus afirmaciones, la práctica por usted desarrollada entre los años 2002 y 2016, se tipificaría como una actividad de intermediación en el mercado de valores. Esta actividad ha sido definida por el legislador como²:

"(...) la realización de operaciones que tengan por finalidad o efecto el acercamiento de demandantes y oferentes en los sistemas de negociación de valores o en el mercado mostrador, sea por cuenta propia o ajena (...)

Parágrafo Serán intermediarios de valores las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia con acceso directo a un sistema de registro de operaciones sobre valores para la realización o registro de cualquier operación de intermediación de valores (...).

Así mismo frente a la actividad de asesoría de inversión, la misma se encuentra regulada bajo los siguientes aspectos:

"Artículo 2.40.1.1.1 Actividad de Asesoría³. La asesoría es una actividad del mercado de valores que únicamente puede ser desarrollada por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia conforme a las reglas que disponen el funcionamiento de los elementos e instrumentos requeridos para que los inversionistas puedan tomar decisiones de inversión según lo previsto en el presente Libro.

Para el efecto las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia elaborarán el perfil del inversionista, establecerán el perfil del producto, realizarán el análisis de conveniencia del producto para el inversionista, suministrarán recomendaciones profesionales, entregarán información y efectuarán la distribución de los productos, de conformidad con las reglas establecidas en atención a la calidad de los inversionistas y a las características de los productos, según lo dispuesto en el presente Libro

Las entidades que desarrollen la actividad de asesoría, deberán hacerlo a través de las personas naturales que expresamente autorice para la ejecución de dicha actividad, las cuales deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores -RNPMV- y contar con la certificación en la modalidad que les permita la realización de esta actividad. Lo anterior, sin perjuicio del uso de herramientas tecnológicas por las entidades, en los términos del Título 5 del presente Libro." (Negrilla nuestra).

Como vemos, las únicas personas autorizadas para llevar a cabo actividades de intermediación y asesoría en el mercado de valores son aquellas personas constituidas con las formalidades legales establecidas y conformadas como entidades vigiladas por esta Autoridad.

Adicionalmente, es importante señalar que para realizar actividades de intermediación en el mercado de valores y promocionarlas a terceros, el ordenamiento positivo vigente dispone la obligación de inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores - RNAMV:

"(...) Decreto 2555 de 2010 Artículo 5.3.1.1.1 Obligación de inscribirse en el RNAMV

"(...) Deberán inscribirse en el RNAMV, las entidades señaladas en el numeral 1 del párrafo 3° del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, las entidades que sean autorizadas para ejercer la actividad de custodia de valores, las personas que realicen actividades de intermediación en el mercado de valores, los fondos mutuos de inversión sometidos al control de la Superintendencia Financiera de Colombia, así como quienes desarrollen la actividad de suministro de información al mercado de valores, los organismos de autorregulación y las entidades que administren sistemas de registro de operaciones sobre valores (...)" (Subrayado y negrilla nuestra). (...)"

² Artículo 7.1.1.1.1 Decreto 2555 de 2010

³ Decreto 2555 de 2010 adicionado por el artículo 1 del Decreto 661 de 2018

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

"(...)

Decreto 2555 de 2010 Artículo 5.4.1.1.2 Sujetos del RNPMV. En el RNPMV deberán inscribirse las siguientes personas:

1. Las personas naturales que al servicio de un intermediario del mercado de valores se encarguen de estructurar directamente operaciones de intermediación, cualquiera que sea la modalidad de vinculación.

2. Las personas naturales que dirijan o ejecuten directamente operaciones de intermediación en el mercado de valores.

"(...)

5. Las personas naturales que promuevan o promocionen la realización de operaciones de intermediación en el mercado de valores.

Parágrafo 1. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá ordenar a cualquier persona natural, que realice alguna de las actividades descritas en el presente artículo, su inscripción en el RNPMV. En tal caso, la Superintendencia Financiera de Colombia establecerá un plazo prudencial para que se haga efectiva dicha medida, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

Parágrafo 2. Las personas naturales que pretendan inscribirse en el RNPMV deberán estar previamente certificadas.

Parágrafo 3. La inscripción o actualización de dicha inscripción en el RNPMV es condición para actuar en el mercado de valores." (negrilla y subrayado fuera de texto)

Es necesario que tenga presente que, si bien la actividad financiera y bursátil corresponden a actividades lícitas, su ejercicio se encuentra restringido a autorización legal por tratarse de actividades de interés público, tal como lo dispone el artículo 335 Constitucional, pues en su ejercicio se canalizan los recursos de la sociedad, por ello se requiere que únicamente sean ejercidas por profesionales autorizados previo el cumplimiento de unos requisitos de carácter, idoneidad, responsabilidad, solvencia patrimonial⁴, entre otros, necesarios para preservar la confianza en el sistema lo que justifica la intervención del Estado en esta actividad.

Así las cosas, de cara a la normatividad vigente previamente anotada, debe señalarse que, de la revisión efectuada en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores – RNPMV de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia, usted no está ni ha estado inscrito, por lo que tampoco se encuentra habilitado para llevar a cabo operaciones de promoción para intermediación en el mercado de valores, actividad que es la que describe y afirma en su recurso haber desarrollarlo en los años 2002 a 2016.

De esta manera se observa que la calificación de actividad "comercial liberal" y "legal" que alega en sus argumentos de defensa, como lo es promocionar y ejecutar la realización de operaciones de intermediación en el mercado de valores requiere autorización estatal previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, circunstancia que usted no acredita.

Ahora, frente a la calidad de inversionista profesional, la misma tiene su lugar en la regulación especial aplicable al sector financiero, asegurador y del mercado de valores, la cual recoge su definición como:

"Definición de inversionista profesional⁵. Podrá tener la calidad de "inversionista profesional" todo cliente que cuente con la experiencia y conocimientos necesarios para comprender, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos inherentes a cualquier decisión de inversión.

Para efectos de ser categorizado como "inversionista profesional", el cliente deberá acreditar al intermediario, al momento de la clasificación, un patrimonio igual o superior a diez mil (10.000) SMMLV y al menos una de las siguientes condiciones:

1. Ser titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a cinco mil (5.000) SMMLV, o

⁴ Artículo 53 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero

⁵ Decreto 2555 de 2010 Artículo 7.2.1.1.2



Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

2. Haber realizado directa o indirectamente quince (15) o más operaciones de enajenación o de adquisición, durante un período de sesenta (60) días calendario, en un tiempo que no supere los dos años anteriores al momento en que se vaya a realizar la clasificación del cliente. El valor agregado de estas operaciones debe ser igual o superior al equivalente a treinta y cinco mil (35.000) SMMLV.

Parágrafo 1. Para determinar el valor del portafolio a que hace mención el numeral 1º del presente artículo, se deberán tener en cuenta únicamente valores que estén a nombre del cliente en un depósito de valores debidamente autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia o en un custodio extranjero.

Parágrafo 2. Para determinar el período de sesenta (60) días calendario a que hace mención el numeral 2º del presente artículo, se tendrá como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de las operaciones de adquisición o enajenación de valores realizadas".

Así mismo, se considera adicionalmente como inversionista profesional:

Otros clientes categorizados como "inversionista profesional"⁶. En adición a los clientes que cumplan las condiciones previstas en el artículo anterior, podrán ser categorizados como "inversionista profesional":

1. Las personas que tengan vigente la certificación de profesional del mercado como operador otorgada por un organismo autorregulador del mercado de valores;
2. Los organismos financieros extranjeros y multilaterales, y
3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia

Como vemos, usted no ha acreditado ninguno de los anteriores requisitos requeridos, por lo que no ha probado tener la calidad de inversionista profesional. No obstante, es importante aclarar que esta clasificación se realiza como medida de protección para los inversionistas con la finalidad de determinar su perfil de conocimiento, dominio y experiencia en el mercado de valores, lo que le permite una mayor habilidad para comprender y evaluar los riesgos asociados a las operaciones realizadas en el mercado de valores, sin que pueda considerarse válidamente que la calidad de "inversionista profesional" lo habilite para operar en nombre de terceros, como equivocadamente lo refiere en su propuesta de defensa.

En este sentido no es admisible su argumento, en el sentido de justificar el haber adquirido obligaciones con terceras personas bajo el amparo de una supuesta actividad de "asesoría en inversiones en el mercado de capitales", toda vez que, si bien esta actividad es lícita dentro del ordenamiento legal colombiano, también lo es que su ejercicio requiere autorización previa. Se observa entonces que usted no ha acreditado que cuenta con la habilitación legal para llevar a cabo operaciones que involucren el manejo, aprovechamiento o inversión de recurso captados del público.

Así las cosas, la realidad económica de las actividades por usted realizadas, dan cuenta de haber asumido pasivos para con el público, al recibir dinero de por lo menos veintiséis (26) personas quienes entregaron la suma de cuatro mil ciento treinta y un millones trescientos treinta y seis mil doscientos pesos (\$4.131.336.200), con el compromiso de devolverlo junto con unos rendimientos fijos según la "PROYECCIÓN DE PAGOS DE INTERESES" que entrega a sus acreedores, obligaciones que garantizó con la suscripción de "PAGARÉS" y con la entrega del documento denominado "BENEFICIARIO DE GARANTÍA". Ante el incumplimiento del pago de sus obligaciones, firmó con sus acreedores un "ACUERDO" en el que reconoce la deuda a su cargo, así como el saldo de la obligación, la forma y fecha en que pretende cancelarla. Esto último no fue cumplido, por lo que las obligaciones a su cargo continúan vigentes sin que a la fecha de expedición del presente acto administrativo se haya probado de su parte lo contrario, por lo que no procede su argumento en el sentido de señalar que ya ha efectuado el pago al 75% de sus acreedores, afirmación que no sustenta con medios de prueba válidos, como si lo hicieron sus acreedores ante esta autoridad, aportando copia de los documentos donde consta sus obligaciones.

⁶ Decreto 2555 de 2010 Artículo 7.2.1.1.3

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

De la misma manera, califica las pruebas testimoniales recabadas como de *"falso testimonio"* lo cual se tiene como una apreciación subjetiva, pues solo se limitó a tachar el material probatorio recaudado sin solicitar prueba alguna⁷ que le permitiera corroborar sus afirmaciones al respecto,⁸ así su actitud pasiva en el proceso de defensa no puede ser óbice para calificar como de falta de objetividad la investigación adelantada por esta Autoridad, cuando por el contrario, se encuentra debidamente sustentado cada uno de los hechos presentados en el acto que se recurre con los medios de prueba conducentes y pertinentes, actividad que no se predica de su parte ni en el desarrollo de la actuación administrativa ni en la interposición del recurso que se resuelve.

Igualmente, llama la atención que no refuta el contenido de las pruebas documentales aportadas en cada testimonio, únicamente limita su línea de defensa a exponer que los documentos exhibidos en la Resolución 0912 de 2019 consistentes en una tarjeta de presentación y el brochure de información en el que se exhibe a los *"posibles inversionistas"* todo el modelo de negocio por usted planteado, corresponden a documentos que datan del año 2007 y *"fue eliminada ese mismo año"* y que, en su criterio, no se puede probar que esta publicidad se haya entregado *"a todos los denunciantes o a más de cuatro personas"*, como tampoco fue entregado, *"a personas en general o innominadas"*, para referir que *"las circunstancias de tiempo, modo y lugar allí plasmadas se encuentran alejadas de la realidad"*.

Bajo la misma línea argumentativa afirma que nunca presentó *"un portafolio de inversión a varios ciudadanos"* pues *"solo prestaba un servicio a ciertas personas que estaban interesadas en invertir en el mercado de valores colombiano"*, con quienes pactaba una tasa de interés durante un periodo de tiempo. Manifiesta que daba a conocer su servicio en una charla personal comentando los riesgos y beneficios del servicio ofrecido, sostiene igualmente que la publicidad referida en la Resolución 0912 de 2019, esto es tarjeta de presentación, brochure y plan de comisiones, no se pueden tener como una *"publicidad en masa ni mucho menos"*.

Sobre el particular, se debe aclarar que no fue con base en esas piezas publicitarias que se estableció la actividad de captación no autorizada de recursos del público, las mismas sirvieron como criterio orientador para establecer la actividad por usted desarrollada la cual fue debidamente probada mediante la información recabada de veintiséis (26) personas, que demostraron su calidad de acreedores a partir de la exhibición de pruebas documentales.

Lo anterior aunado a la verificación de los registros existentes tanto en este Órgano de Control como en las entidades vigiladas de donde se pudo extraer las operaciones por usted realizadas en el mercado de valores, se logró probar plenamente la actividad por usted desarrollada la cual es ratificada en el argumento del recurso interpuesto, situación que no difiere del contenido de las piezas publicitarias aducidas, por lo que llama la atención su argumento al referir que las mismas salieron de circulación desde antes del año 2008 cuando continuó con esta actividad hasta el año 2016, *"durante más de 14 años inclusive"*, por lo que el tiempo que circularon estas piezas publicitarias carece de relevancia frente a lo planteado. Sin embargo, en gracia de discusión dentro del expediente de la actuación administrativa obra prueba de ocho (8) declarantes que aportaron estos medios publicitarios, lo que desvirtúa su afirmación que la misma no fue entregada a más de tres (3) personas.

Como vemos, la configuración de los supuestos de captación no autorizada de recursos del público se encuentra sustentada en la valoración de diferentes medios probatorios que en extenso fueron sustentados en la resolución 0912 de 2019 y no exclusivamente en la información aportada en las pruebas testimoniales como equivocadamente lo refiere en su argumento de reposición.

De otra parte, según su apreciación en relación con la información aportada por la Fiscalía General de la Nación, sostiene que la suma denunciada es negativa, situación que señala hubiese podido demostrar de haber conocido el *"contenido de la queja"*; frente a este argumento, es necesario resaltar que, en virtud del principio constitucional de colaboración armónica entre las entidades del estado, esta Autoridad está facultada para solicitar información a

⁷ Código General del Proceso artículo 167, carga de la prueba.

⁸ Artículo 270 del Código General del Proceso.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

diferentes Órganos para el cumplimiento de sus fines, facultad materializada en lo dispuesto en el numeral 4), literal d) del artículo 326 del EOSF, que nos autoriza a: *"Adelantar averiguaciones y obtener la información probatoria que requiera de personas, instituciones o empresas ajenas al sector financiero, siempre que resulten necesarias en el desarrollo de su función de vigilancia e inspección y se cumplan las formalidades legales"*, por lo cual se solicitó información a esa Autoridad referente a denuncias en su contra, conociendo información de diez (10) denunciante adicionales a los acreedores conocidos por esta Superintendencia, quienes coinciden en señalar que le entregaron dinero con el objeto de obtener el retorno del capital entregado y el pago de unos intereses, obligaciones que no les habían sido pagadas.

Sobre esta información de la Fiscalía, la misma se considera como una prueba sumaria teniendo en cuenta que no ha sido controvertida, no obstante, constituye plena prueba para demostrar la existencia de obligaciones vigentes de su parte con terceros, hechos objeto de investigación por esta Autoridad. Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado en este sentido en la sentencia C- 523 de 2009, precisando los siguientes aspectos:

"Aunque la legislación colombiana no define lo que debe entenderse por prueba sumaria, su noción ha sido precisada por la doctrina y la jurisprudencia nacionales. Así, para Antonio Rocha Alvira, la prueba sumaria es aquella que aún no ha sido controvertida por aquel a quien puede perjudicar, y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la prueba sumaria es plena prueba, lo que quiere decir que debe reunir las mismas condiciones de fondo de cualquier prueba, que sea pertinente o conducente, esto es, que sea la adecuada para demostrar un hecho o un acto jurídico concretos. En ese sentido la doctrina ha sido uniforme en señalar que la prueba sumaria suministra al juez la certeza del hecho que se quiere establecer en idénticas condiciones que lo hace la plena prueba, con la diferencia que la prueba sumaria no ha sido sometida a contradicción, ni conocimiento o confrontación por la parte contra quien se quiere hacer valer. Siendo claro que la prueba sumaria, es aquella que reúne las características de plena prueba que aún no ha sido controvertida, su exigencia para el decreto de las medidas, no vulnera los postulados constitucionales ni menoscaba las posibilidades del debido proceso para el demandante, puesto que siendo las medidas cautelares de carácter preventivo y provisional, el debate probatorio sobre la titularidad de los derechos y la validez de los documentos aportados se da a plenitud dentro del proceso verbal respectivo ante los jueces competentes de la justicia ordinaria civil. Por tanto, para la Corte, el legislador obró conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas"

En este sentido, usted, al inicio de nuestra actuación, contó con la oportunidad de hacerse parte en el proceso y contradecir el contenido de esta información, oportunidad que como se verá más adelante, usted rechazó. Así mismo, tuvo otra oportunidad procesal como lo es el recurso de reposición, en donde pudo haber solicitado o presentado, en ejercicio del derecho de defensa que le asiste, las pruebas necesarias con la finalidad de aclarar, modificar, adicionar o revocar el acto administrativo impugnado y de solicitar los medios de prueba que consideraran conducentes y pertinentes para contradecir los dicho por los denunciante, hecho que nuevamente no sucedió, pese a que contó con todas las garantías procesales para el efecto, por lo que la sola afirmación de su parte en lo relativo a la cuantía reportada por los denunciante no constituye un medio de prueba legítimo para contradecir el contenido de estas denuncias.

También precisa que es *"temerario pretender involucrar a la empresa HOTEL GMF S.A.S. con mis negocios particulares"*; sostiene que las acciones de las que es titular en esta sociedad fueron entregadas a sus acreedores *"como contraprestación de intereses no recibidos en el pasado"* y que fue una *"ligereza"* de esta Superintendencia afirmar que es accionista de HOTELES GMF S.A.S. por lo que solicita la corrección de esta aseveración.

Ahora, para esta Superintendencia en lo relativo a la mención en la Resolución 0912 de 2019 como accionista de la sociedad HOTELES GMF S.A.S., la misma tiene su sustento en el análisis efectuado por la comisión de visita a la información aportada por esa sociedad en virtud de la visita de inspección adelantada con ocasión de los hechos conocidos en su contra, en donde se refería su relación con la misma, identificando que usted recibió acciones de HOTELES GMF S.A.S., producto de la venta de un lote en el Municipio de Anapoima, las cuales a su vez según se conoció, fueron cedidas a terceras personas; así las cosas, después de efectuado todo el cotejo de la información aportada por los representantes de HOTELES GMF S.A.S., cuyos registros figuran hasta el 30 de junio de 2017, quedó establecida la composición accionaria de la sociedad de la siguiente manera:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO **1380** DE 2019

Hoja No. 11

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

Nombre Accionistas	No. Acciones	Porcentaje
Galvarino Camilo Galvis Fajardo	10.000	0,03%
Ticci Naxali Galvis Fajardo	10.804.310	33,71%
Dora Nelly Fajardo Camacho	11.625.000	36,27%
Otros	9.610.690	29,99%
Total	32.050.000	100,00%

En este sentido no procede su solicitud de corregir la mención realizada respecto de su calidad de accionista de la sociedad HOTELES GMF S.A.S., toda vez que la misma no es una equivocación sino por el contrario surge de la valoración y análisis de la documentación recibida directamente de la sociedad, lo que permitió establecer dicha información, situación que no es desvirtuada por usted mediante elemento de prueba válido, por lo que la sola mención de su parte no constituye un mecanismo probatorio para desvirtuar esta afirmación que si se encuentra debidamente probada por esta Autoridad.

En consonancia con el contenido de sus argumentos, aduce el recurrente que la comisión de visita no le dio a conocer los "supuestos hechos de captación masiva de dineros del público" lo que en su sentir coarta su derecho de defensa, debido proceso y garantías constitucionales porque también se le impidió el acceso a la actuación administrativa pues "nunca me quiso dar información de los supuestos hechos de captación" ni se le permitió conocer los cargos de los que se le acusaba, ni las personas que hacían estas manifestaciones, circunstancias de las que solamente tuvo conocimiento con la expedición del acto que se recurre para así "predicar la nulidad de la resolución objeto de este recurso desde el mismo acto de inicio de la actuación". Finalmente considera que no hubo una investigación objetiva y sostiene que existió un "sesgo de la comisión investigadora" al no verificar lo dicho por los quejosos con otro medio de prueba.

En lo relativo a la vulneración al derecho de defensa, debido proceso y garantías constitucionales, resulta oportuno señalar que esta Superintendencia en cumplimiento del procedimiento administrativo especial y cautelar aplicable en materia de captación no autorizada de recursos del público, desarrolla su actuación administrativa frente a personas naturales o jurídicas no sometidas a su vigilancia, de quienes tenga evidencia atendible que permita inferir la ejecución de actividades de recaudo o captación masiva de dineros del público sin autorización previa del Estado, esto es, ilegalmente, para ello puede con base en las facultades establecidas en los literales a), e) y d) ya citado, del numeral 4 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las cuales disponen:

a) Practicar visitas de inspección cuando exista evidencia atendible sobre el ejercicio irregular de la actividad financiera, obtenida de oficio o suministrada por denuncia de parte, a los establecimientos, oficinas o lugares donde operan personas naturales o jurídicas, no sometidas a vigilancia permanente, examinar sus archivos y determinar su situación económica, con el fin de adoptar oportunamente, según lo aconsejen las circunstancias particulares del caso, medidas eficaces en defensa de los intereses de terceros de buena fe, para preservar la confianza del público en general;

e) Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta clase de pruebas en el procedimiento judicial, a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones de inspección e investigación.

En desarrollo de esta facultad podrá exigir la comparecencia, haciendo uso de las medidas coercitivas que se consagran para estos efectos en el Código de Procedimiento Civil.

Como vemos, en lo que corresponde a la argumentación planteada sobre lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política en relación con el debido proceso procede recordar que la norma citada establece: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (...)"

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

Así, tenemos que el debido proceso es el conjunto de normas y reglas procesales predeterminadas en la Constitución y la Ley, que obligatoriamente debe acatar toda autoridad administrativa, con el fin de salvaguardar los derechos de los asociados.

Del citado derecho se desprende que deben respetarse todas las garantías para el investigado indicándole la competencia del funcionario que adelantó la actuación administrativa y las normas vigentes de las que se pregonan su incumplimiento, igualmente es necesario que se cumplan las formalidades propias del proceso.

Lo anterior, tiene sustento vía jurisprudencia, una de las cuales se encuentra contenida en la emitida por la Corte Constitucional Sentencia T – 965 del 8 de octubre de 2004 con ponencia del HM Humberto Sierra Porto, oportunidad en la que se expuso:

"(...) El derecho al debido proceso administrativo es definido, entonces, como (i) el complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí y (iii) cuyo fin esta previamente determinado de manera constitucional y legal. El objeto de esta garantía superior es (i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones, y (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica de los administrados (...)"

Como se observa, si bien la garantía de los derechos del investigado en el proceso administrativo hace parte del llamado principio del "debido proceso", no lo es menos que el menoscabo de éste no solo se agota cuando no se cumple con el derecho de defensa y de contradicción, que se acataron en este caso, sino, además, ya sea porque se omiten, se adicionan otros pasos o se adopta la respectiva decisión sin las formalidades legales que él contenga, o las generales que deban aplicarse, por lo que para el caso objeto de revisión se aplicó el procedimiento cautelar especial dispuesto en el ordenamiento vigente para el efecto.

Particularmente, el derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas opera en tres estadios, a saber: en la formación de la decisión o sea en todo el trámite que se surta, desde su iniciación, en la impugnación de la determinación, mediante el ejercicio de los recursos en la vía gubernativa y, en la notificación o publicación de esta decisión, observando en todas esas etapas la plenitud de las formas propias de la respectiva actuación.

De otra parte, la Corte Constitucional ha señalado el derecho a la defensa como una garantía del debido proceso; que se encuentra a su vez integrado por el derecho de contradicción y por el derecho a la defensa técnica, lo cual sintetiza como la garantía que se otorga de acudir al proceso y poder defender sus intereses. Veamos a continuación un pronunciamiento de esa Corporación en este sentido:

"Ahora bien, esta Corporación ha explicado que el derecho al debido proceso se descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses ya sea de los sujetos procesales, o de la colectividad a una pronta y cumplida justicia. Es así que ha señalado como una de sus principales garantías, el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona "de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga", es decir, la garantía que se otorga de acudir al proceso y poder defender sus intereses.

En el texto constitucional colombiano, el derecho a la defensa se encuentra consagrado en el mismo artículo 29 Superior al referir lo siguiente: "[q]uien sea sindicado tiene derecho a la defensa"; y en el plano internacional del sistema interamericano, el artículo 8° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José, establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías judiciales y dentro de un plazo razonable, y a contar con la oportunidad y el tiempo para preparar su defensa.

Esta Corporación ha destacado la importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio se busca "impedir la arbitrariedad de los agentes estatales

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado." Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal que "constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico", y que se encuentra a su vez integrado por el derecho de contradicción y por el derecho a la defensa técnica.

Aunque el derecho a la defensa debe ser garantizado por el Estado en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en sostener que éste se proyecta con mayor intensidad y adquiere mayor relevancia en el escenario del proceso penal, sin que por ello merezca exclusión en otro tipo de actuaciones judiciales o administrativas en donde se impongan limitaciones a otros derechos, en particular cuando se está en el campo del derecho sancionador ejercido por cualquier poder del Estado, donde uno de sus pilares a garantizar es justamente el derecho a la defensa de quien resulta afectado.

De allí que esta Corporación se haya referido a que en la producción y aplicación del derecho, se pueden presentar tensiones entre las distintas garantías que conforman la noción amplia de debido proceso, como por ejemplo, la derivada del principio de celeridad que puede entrar en conflicto con el derecho a la defensa, en la medida en que términos cortos para cumplir deberes o cargas impuestas a las partes, muchas veces recorta la posibilidad de controversia probatoria o argumentativa que tienen las mismas.

Esa tensión puntualmente ha sido objeto de estudios por esta Corporación en muchas ocasiones, en las cuales ha concluido que aquel principio debe prevalecer por reportar un mayor alcance a intereses públicos legítimos o a otros derechos fundamentales implicados, y que el derecho a la defensa y a la contradicción pueden ser limitados sin afectar la estructura de su núcleo fundamental, que es la posibilidad de que la persona pueda concurrir al trámite en procura de anteponer sus argumentos. En últimas, debe optarse por preferir que ambos derechos sean garantizados en la mayor medida posible⁹.
(Negrita y subrayado fuera de texto)

Así, conviene precisar que las actuaciones administrativas que adelanta esta Superintendencia a efectos de verificar si una persona natural o jurídica incurre o no en una captación o recaudo masivo de recursos del público en forma no autorizada, se inician con el oficio dirigido a la misma anunciándole la realización de la visita de inspección correspondiente y no mediante la expedición de un acto administrativo de contenido particular anterior en el que se ordene comenzar la actuación.

La actuación administrativa se inicia con la expedición de una comunicación dirigida a la persona objeto de dicha actuación, en la que se informa la práctica de la misma en las instalaciones del domicilio correspondiente, el carácter especial de la actuación, se ponen de presente las facultades con las que cuenta este Organismo para tal fin anteriormente citadas, así como las funciones correspondientes, previstas en los numerales 8, 9, 10 y 16 del artículo 11.2.1.4.10 del Decreto 2555 de 2010¹⁰, el objetivo de la actuación, la cantidad de funcionarios de este Organismo designados para realizar la visita de inspección, los documentos que deben aportarse, con la precisión de incluir todos aquellos que considere pertinente para demostrar que la actividad desarrollada no se enmarca dentro de los presupuestos de una captación no autorizada de recursos del público y ejercer su derecho defensa.

Todo lo anterior se cumplió a cabalidad mediante el oficio número 2018129298-001 dirigido a usted y recibido personalmente a la comisión de visita el día 4 de octubre de 2018 en la Avenida el Dorado No. 68C- 61 oficina 604 en

⁹ Corte Constitucional, Sentencia C-838 de 2013

¹⁰ "Artículo 11.2.1.4.10. Despacho del Superintendente Delegado para Protección al Consumidor Financiero y Transparencia. (...) 8. Desplegar las medidas a su alcance para prevenir el ejercicio ilegal de la actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores. 9. Adoptar las medidas cautelares y ejecutar las medidas de intervención administrativa previstas por las normas vigentes, para los casos de ejercicio ilegal de actividades propias de las entidades supervisadas. 10. Coordinar las medidas de intervención administrativa y las medidas cautelares que se profieran en las investigaciones relacionadas con el desarrollo de actividades, negocios y operaciones propias de las entidades supervisadas, sin la debida autorización estatal. 16. Ordenar y dirigir la práctica de visitas con el fin de obtener conocimiento sobre los asuntos de su competencia.

Hoja No. 14

¹¹ Radicado 2018129298-057 citado en Resolución 0912 de 2019 página No° 5.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1380

DE 2019

Hoja No. 15

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

No obstante, a pesar de haber obtenido copia del expediente y de haber interpuesto recurso de reposición en contra de la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019, no solicitó la práctica como tampoco requirió la incorporación de pruebas adicionales en apoyo de sus argumentos.

En consecuencia, ante su negativa manifiesta a aportar información en el desarrollo de la actuación administrativa adelantada, esta Superintendencia en cumplimiento de su objetivo de evitar que las personas no autorizadas, conforme a la ley, ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas y atendiendo el reporte generado a esta Autoridad con ocasión de las actividades por usted desarrolladas, continúo con su labor de recaudo de información de otras fuentes, por lo que solicitó a Autoridades, entidades financieras y acreedores información adicional que pudieran contribuir a esclarecer el verdadero objeto de su ejercicio económico.

Así las cosas, se recibieron dieciséis (16) declaraciones de personas que decidieron acudir a este ente de Control de manera libre, quienes manifestaron haberle entregado recursos aportando los respectivos soportes documentales que sustentaban su testimonio, consistentes en información comercial, carta de "BENEFICIARIO EN GARANTÍA", "COMPROBANTES" "PAGARES" y "ACUERDOS" suscritos por usted como originador de la operación mediante la cual se obligó frente a los mismos.

Esta Información y documentación allegada fue valorada junto con la aportada por otras Autoridades, lo que permitió establecer la configuración de los supuestos normativos para predicar frente a usted una captación o recaudo no autorizados de recursos del público señalados en el artículo 2.18.2.1. del Decreto 1068 de 2015, acervo probatorio recabado con el pleno cumplimiento de todas las formalidades procesales y que sustenta la medida administrativa contenida en la Resolución 0912 de 2019.

En conclusión, en materia de captación no autorizada de recursos del público nos encontramos frente a un procedimiento cautelar especial que corresponde a un procedimiento abreviado dada la naturaleza del bien jurídico que se busca proteger el cual se encuentra determinado en preservar la confianza y la protección del ahorro del público, situación que prevalece ante los intereses particulares, el cual, a pesar de su carácter inmediato cumple con todos los presupuestos del debido proceso esto es: i) ser juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ii) ante juez o tribunal competente iii) con observancia de las formas propias de juicio iv) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, lo cual fue cumplido durante el desarrollo de la actuación administrativa y con la interposición del recurso de reposición.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que en el presente caso se atendieron las reglas relativas en cuanto a la competencia del funcionario que adoptó la decisión; al procedimiento aplicable para el efecto, lo que le permitió ejercer su derecho de defensa al contar con la oportunidad para suministrar toda la información y explicación que consideraran necesaria para demostrar que en su actividad económica no se configuraba una actividad ilegal, oportunidad en la que decidió no aportar la información requerida durante la inspección, tal como quedó demostrado, ni solicitar las pruebas necesarias en el recurso de reposición, situación muy diferente a lo que manifiesta en el sentido de que esta Autoridad le haya desconocido sus garantías constitucionales al debido proceso y defensa como equivocadamente lo refiere en sus argumentos, por lo que no se puede predicar la nulidad del acto impugnado.

En esta medida, los argumentos presentados bajo los primeros tres acápites planteados en el recurso de reposición no prosperan por las razones expuestas en este considerando.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1380

DE 2019

Hoja No. 16

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

5.2. Argumentos del recurrente respecto de las obligaciones adquiridas y la configuración de los supuestos de captación no autorizada de recursos del público.

Bajo estos argumentos se presenta el estado de las obligaciones adquiridas para demostrar que solo existen seis (6) obligaciones vigentes por lo que en su criterio no se configuran los supuestos de captación no autorizada de recursos del público. Veamos el contenido de estos argumentos:

(...) "4. A continuación me permito adjuntar el cuadro del estado real de los dineros que fueron invertidos y el monto pagado a cada uno de los denominados acreedores a que se refiere la resolución¹² haciendo la salvedad de que se hizo esta tabla con base en los montos denunciados, los extractos de las declaraciones y la información de accionistas de Hoteles GMF, pues no se aportaron los nombres de estas personas en la actuación:

No Persona	MONTO REPORTADO EN LA DENUNCIA O QUEJA	CEDULA DEL ACREEDOR	NOMBRE DEL ECREEADOR	FECHA DE INICIO DE LA RELACION COMERCIAL	DINERO REAL CONSIGNADO POR LOS ACREEDORES (A)	TOTAL DINERO PAGADO POR GCGF (B)	SALDO DE LA OBLIGACION (A - B)	RENTABILIDAD (B/A)	ACUERDO
1	261.300.000	41.712.663	SONIA STELLA BAYONA JIMENEZ	12 enero, 2017	160.000.000	97.568.000	62.432.000	-39,02%	NO
2	50.000.000	1.019.112.018	SANDRA NATALIA ISAZA BAYONA	02 marzo, 2014	37.250.000	-	37.250.000	-100,00%	NO
3	183.000.000	1.020.762.305	PAOLA ANDREA ISAZA BAYONA	02 marzo, 2014	225.000.000	632.560.000	161.744.000	-71,89%	NO
1	300.000.000		PERSONA 1 FISCALIA	12 septiembre, 2005	440.800.000	305.605.000	135.195.000	-30,67%	NO
7	435.600.000		PERSONA 7 FISCALIA	03 junio, 2010	730.173.936	519.511.000	210.662.936	-28,85%	NO
9	100.000.000		PERSONA 9 FISCALIA		100.000.000	80.539.000	19.461.000	-19,46%	NO
6	250.000.000	41.367.827	ANA YOLANDA BALEN HERNANDEZ	06 abril, 2011	325.000.000	257.500.000	-	0,00%	SI
9	166.900.000	52.089.120	LORETO PARRA RUEDA	20 marzo, 2014	140.800.000	14.144.000	-	0,00%	SI
12	341.285.000	41.421.425	NOHORA RUEDA JAJARDO	03 septiembre, 2008	215.170.000	7.000.000	-	0,00%	SI
3	130.000.000		PERSONA 3 FISCALIA	04 abril, 2014	190.000.000	132.899.000	-	0,00%	SI
8	85.000.000		PERSONA 8 FISCALIA	28 abril, 2006	125.000.000	83.252.000	-	0,00%	SI
4	206.900.000	41.714.310	GLORIA JANETH BAYONA JIMENEZ	12 junio, 2005	276.900.000	417.318.000	-	50,71%	NO
7	197.900.000	41.457.930	AURA STELLA BALLEN HERNANDEZ	16 julio, 2002	382.400.000	588.242.960	-	53,83%	SI
8	230.000.000	79.783.775	CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ CAMARGO	09 noviembre, 2007	200.000.000	247.467.000	-	23,73%	SI
10	125.000.000	41.712.662	MARTHA NURY BARRERA VALENZUELA	02 abril, 2004	140.000.000	220.141.000	-	57,24%	SI
11	80.000.000	51.583.331	MYRIAM LASERNA VELEZ	28 noviembre, 2011	72.000.000	79.408.200	-	10,29%	SI
13	25.000.000	20.320.378	MARLY RUEDA FAJARDO	16 junio, 2009	25.150.000	29.990.000	-	19,24%	NO
14	120.000.000	90.704.657	JUANITA ALICIA MELO BASTIDAS	09 mayo, 2008	120.000.000	230.495.000	-	92,08%	NO
15	148.000.000	21.074.222	ONEIDA CLEMENTINA MELO DE AREVALO	26 julio, 2011	170.000.000	193.740.000	-	13,96%	NO
16	180.000.000	32.467.081	GENI MARIELA MELO BASTIDAS	09 octubre, 2009	276.160.000	413.672.000	-	49,79%	NO
5	150.000.000	52.708.706	ANA MARIA NARANJO PACHECO	15 enero, 2015	50.000.000	61.705.000	-	23,41%	SI
10	125.000.000		PERSONA 10 FISCALIA	02 abril, 2004	140.000.000	220.141.000	-	57,24%	SI
2	150.000.000		PERSONA 2 FISCALIA	15 septiembre, 2011	50.000.000	61.705.000	-	23,41%	SI
4	450.000.000		PERSONA 4 FISCALIA	23 diciembre, 2011	753.518.361	802.601.088	-	6,51%	SI
5	856.532.000		PERSONA 5 FISCALIA	16 diciembre, 2011	978.000.000	980.477.000	-	0,25%	SI
6	62.000.000		PERSONA 6 FISCALIA	23 noviembre, 2011	62.000.000	67.192.100	-	8,37%	SI
						TOTAL	626.744.936		

EXPLICACIÓN TABLA

¹² Esta tabla se encuentra soportada en documentos de consignación a diferentes bancos donde las personas tenían sus cuentas. Incluso en cuentas de terceros donde algunos me solicitaban que les consignara. Documentos que de haber sabido el nombre de estas personas en el momento oportuno hubiera aportado sin inconveniente, pero tal información se me impidió conocerla hasta el día de hoy.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1380 DE 2019 Hoja No. 17

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

MONTO REPORTADO EN LA DENUNCIA O QUEJA	Es el monto de la acreencia el cual las personas o acreedores reportaron ante la Fiscalía o Superfinanciera.
CEDULA DEL ACREEDOR	Documento de identificación del acreedor
NOMBRE DEL ACREEDOR	Nombre del acreedor.
FECHA DE INICIO DE LA RELACION COMERCIAL	Fecha de inicio de la relación comercial en la cual se demuestra con la firma formal de los documentos
DINERO REAL CONSIGNADO POR LOS ACREEDORES (a)	Es el dinero total que los acreedores depositaron en la comisionista de bolsa desde la fecha de inicio de la relación comercial hasta el año 2016
TOTAL, DINERO PAGADO POR GCGF (b)	Es la totalidad del dinero que el Sr. Galvarino Camilo Galvis Fajardo (GCGF) depositó en las cuentas de los acreedores desde la fecha de inicio de la relación comercial hasta el año 2017
SALDO DE LA OBLIGACION (A - B)	Es la resta entre el dinero real consignado por los acreedores (A) menos el total dinero pagado por el Sr Galvarino Camilo Galvis Fajardo
RENTABILIDAD (B/ A)	Es la relación entre el total dinero pagado por GCGF (B) y el dinero real consignado por los acreedores (A) Significa: RENTABILIDAD es positiva el acreedor recibió su capital más una utilidad. RENTABILIDAD es cero el acreedor recibió su capital o acordó recibir acciones de HOTELES GMF S.A.S de propiedad del Sr. Galvarino Galvis para pagar la diferencia de deuda. RENTABILIDAD NEGATIVA: El ' acreedor no ha recibido la totalidad del capital
ACUERDO	Es el acuerdo firmado con el acreedor en el cual el Sr Galvarino Galvis se comprometió a entregar sus acciones en HOTELES GMF S.A.S. por la porción de deuda faltante a cancelar.

ACREEDORES A PAZ Y SALVO CON EL SR GALVARINO GALVIS	20
ACREEDORES CON SALDO	6
PORCENTAJE DE ACREEDORES CON PAZ Y SALVO	76.92%
PORCENTAJE DE ACREEDORES SON SALDO	23.08%

Lo mínimo que se esperaba por parte de la Comisión investigadora era una labor seria, objetiva y completa de corroboración de la información que se le puso de presente por los quejosos. Un análisis de sus productos financieros y/o la prueba aportada por estos, más allá de sus declaraciones (amañadas y mendaces) llevaría a tener la información contenida en esta tabla y el análisis de la misma, lo cual brilla por su ausencia en la resolución 0912 y que es el principal motivo de impugnación.

La Superintendencia financiera, a través de la comisión investigadora, no contrastó ni corroboró la información ofrecida por los quejosos con otros medios de prueba, o al menos así se deduce del cuerpo de la resolución; no se me permitió conocer de la queja y/o de los hechos de la misma para ejercer mi derecho de defensa y aportar la información pertinente a los hechos imputados y que demuestran el cumplimiento de cualquier obligación contraída con la mayoría de estas personas, por lo que es apropiado sostener QUE LA RESOLUCIÓN ADOLECE DE UNA INDEBIDA MOTIVACIÓN Y/O CARECE DE MOTIVOS FUNDADOS PARA ADOPTAR LA MEDIDA ADMINISTRATIVA DEPRECADA. (sic)

Esta información era tan relevante que incidiría sustancialmente en el punto "13. 8 Del patrimonio liquido del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO" pues mi patrimonio liquido del año 2015 de \$ 1.421.667.000 el 50% equivale a 710.833.500 es superior al saldo de todas las obligaciones que equivalen a \$626,744,936 descartándose así el parágrafo 1 numera 1 literal a) del artículo 2.18.2.1 del decreto 1068 del 26 de mayo de 2015.

5. Con relación a los supuestos de captación se ha demostrado que las personas que entregaron los dineros lo hicieron de manera voluntaria e informada con la intención de que se invirtieran en el mercado de capitales a través de un inversionista profesional, como lo soy yo, y de un intermediario del mercado de valores (comisionista) con la intención de obtener rendimientos por encima de lo que ofrecían los bancos, actividad completamente legal y razonable en este mercado.

Este servicio era ofrecido individualmente, con personas determinadas. No innominadas como lo refiere la resolución, pues el servicio ofrecido era personalizado con personas allegadas e interesadas en invertir en el mercado de capitales conmigo. La información sobre tarjetas de presentación y brochure en el que se basa la resolución solo fue utilizado en un corto periodo de tiempo, antes de la promulgación de la normatividad sobre captación masiva y habitual de dineros, época en que existía una falta de regulación y educación financiera al respecto (2002-2008).

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

En otras palabras, la base fáctica y probatoria sobre la que se basa la resolución no corresponde a la realidad, pues desde el 2008, hace más de 10 años, no se utiliza la documentación señalada.

Ahora bien, como se demostró en la tabla adjunta, por el servicio ofrecido a través de mi cuenta en las diferentes comisionistas, quienes nunca tuvieron problema con las consignaciones hechas por mis clientes, se realizaron pagos durante más de 14 años inclusive, demostrándose la contraprestación por el servicio ofrecido donde se cancelaron pagos a capital y rendimientos.

Por otra parte, con relación a las obligaciones contraídas, como se puede observar SOLO EXISTEN (6) SEIS acreedores vigentes cifra menor a las 20 personas o 50 obligaciones vigentes que exige la normatividad sobre la materia. De las 26 personas que enumera la Superintendencia Financiera, 15 obtuvieron la contraprestación acordada antes de mayo de 2017, dos años antes que la resolución 912 de 2019 que profieren en mi contra; 5 obtuvieron una porción del pago de capital y la diferencia en acciones de Hoteles GMF SAS también en 2017.

Lo anterior, demuestra que no se dan los supuestos mínimos de captación alegados en la resolución, ello sumado a que desde el año 2017 dejé de prestar mis servicios y, como lo he demostrado, en desarrollo del mismo se hizo devolución de los capitales entregados a la mayoría de las personas acá indicadas, razones suficientes para solicitar se revoque la resolución 912 de 2019" (...)

5.2.1. Consideraciones de la Superintendencia Financiera

En estos últimos dos puntos encontramos, de acuerdo con su valoración, el estado de las obligaciones a la fecha de los veintiséis (26) acreedores citados en la Resolución 0912 de 2019, aseverando la existencia exclusiva de solo seis (6) obligaciones vigentes, para afirmar una supuesta ausencia de comprobación de esta Autoridad de las versiones testimoniales lo que resulta en una omisión de información relevante que incidiría al momento de cotejar el monto de las obligaciones vigentes con el valor del patrimonio líquido, siendo éste último ostensiblemente superior a las obligaciones vigentes, por lo que no habría lugar a la configuración de los supuestos de captación no autorizada de recursos del público. Ello aunado a la reiteración de la violación a su derecho de defensa para sostener que "la resolución adolece de una indebida motivación y/o carece de motivos fundados para adoptar la medida deprecada".

Adicionalmente, manifiesta los siguientes presupuestos como argumentos para sostener que en su actividad no se configuran los supuestos mínimos de captación, los que considera como razones suficientes para solicitar la revocatoria del acto impugnado.

- Los acreedores entregaron de manera "voluntaria e informada" los recursos con la intención de ser invertidos en el mercado de valores a través suyo en calidad de inversionista profesional.
- El servicio fue ofrecido individualmente a personas determinadas.
- La base fáctica sobre la que se basa la resolución no corresponde a la realidad pues desde hace más de 10 años no se utiliza la documentación señalada
- Solo existen seis (6) obligaciones vigentes.

Para abordar el contenido de los argumentos propuestos sea lo primero precisar que esta Autoridad realizó el análisis detallado de la información recabada en desarrollo de la actuación administrativa adelantada, dentro del cual no se pudo incluir información de su parte ante su negativa de aportar la información requerida para esclarecer los hechos objeto de investigación, por lo que resulta temerario en su argumentación, mencionar que no se le permitió aportar supuesta información adicional que se encontraba en su poder para descalficar la actuación de esta Superintendencia.

Frente al "cuadro del estado real de los dineros que fueron invertidos y el monto pagado a cada uno de los denominados acreedores" el cual refiere "Esta tabla se encuentra soportada en documentos de consignación a diferentes bancos donde las personas tenían sus cuentas. Incluso en cuentas de terceros donde algunos me solicitaban que les consignara. Documentos que de haber sabido el nombre de éstas personas en el momento oportuno hubiera aportado sin inconveniente, pero tal información

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1380 DE 2019 Hoja No. 19

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

se me impidió conocerla hasta el día de hoy" " los cuales no aporta, se debe resaltar que la sola mención del documento no acredita su existencia, y en este escenario le corresponde a usted probar el supuesto¹³ de hecho que sustenta sus argumentos, pues corresponde a información y documentación que según lo señala se encuentra en su poder, lo que lo ubica en una mejor posición para probar el hecho por tener en su haber el objeto de prueba.

Así las cosas, lo expuesto en el recurso de reposición relativo al "estado real" de las obligaciones asumidas, corresponde a una apreciación subjetiva que carece de sustento probatorio lo cual se acompasa con la actitud pasiva y reticente que ha sostenido durante el desarrollo de esta actuación administrativa. Contrario a sus afirmaciones, en toda la actuación administrativa surtida así como con ocasión de la medida administrativa impuesta, esta Superintendencia ha dejado plenamente respaldado cada hecho con los medios de prueba conducentes y pertinentes para el efecto.

Lo anterior adicionalmente encuentra sustento en el análisis efectuado a la información recabada por esta Autoridad, en donde adicional a los diez (10) denunciante acreditados por información de la Fiscalía General de la Nación, se recibieron en total veinticuatro (24) declaraciones de personas que certificaron su calidad de acreedores bajo las circunstancias ya explicada en extenso en el presente acto administrativo; de estas veinticuatro (24) personas se identificó a ocho (8) personas quienes de acuerdo con la documentación aportada, permitieron a esta Autoridad conocer que habían celebrado un acuerdo de pago con usted mediante la recepción de acciones de la sociedad GMF SAS y otra parte en dinero, con lo cual se cubría el valor total de la obligación, ello sin perjuicio de que la autoridad competente califique este acto jurídico de pago en acciones como válido para los efectos propios del negocio jurídico celebrado, actuación que no es de resorte de este ente de control, no obstante, se excluyeron estas ocho (8) personas para los efectos de la adopción de la medida administrativa contenida en la Resolución 0912 de 2019, teniendo en cuenta que en el libro de accionistas de la sociedad mencionada aparecían registrados.

Con la exclusión de estas ocho (8) personas, se tiene un total de veintiséis (26) acreedores con obligaciones vigentes a la fecha de expedición del acto administrativo que se recurre, bien porque no se le había honrado su obligación o porque el acuerdo de pago suplió una parte de la obligación quedando un saldo remanente. A continuación, se presenta el análisis efectuado por la Comisión de Visita a partir de la información recaudada y soportada que sirvió como insumo para la adopción de la medida administrativa que se recurre, cuyo resultado se plasmó en el numeral 13.4 del acto recurrido: Veamos:

Acuerdo de pago							
No. Persona	Expediente - Fecha	Saldo Obligación a 31 de marzo de 2019	Fecha	Pago efectivo	Transferencia acciones	Pago total	Saldo con pago en acciones
1	2018129298-239-43 - 13/11/2018	\$150.000.000	14/03/2017	\$0	\$119.999.600	\$119.999.600	\$30.000.400
2	2018129298-252-31 - 1/11/2018	\$250.000.000	7/04/2017	\$34.575.000	\$195.925.000	\$230.500.000	\$54.075.000
4	2018129298-255-35 - 8/11/2018	\$197.900.000	7/04/2017	\$29.700.000	\$168.200.000	\$197.900.000	\$29.700.000
7	2018129298-104 - 4/01/2018	\$230.000.000	7/04/2017	\$30.000.000	\$200.000.000	\$230.000.000	\$30.000.000

¹³ Código General del Proceso artículo 167, carga de la prueba

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO **1380** DE 2019

0001 Hoja No. 20

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

No. Persona	Expediente - Fecha	Saldo Obligación a 31 de marzo de 2019	Acuerdo de pago				
			Fecha	Pago efectivo	Transferencia acciones	Pago total	Saldo con pago en acciones
12	2018129298-244-59 - 27/12/2018	\$166.900.000	Sin Fecha	\$28.035.000	\$138.865.000	\$166.900.000	\$28.035.000
14	2018129298-261-141 - 22/01/2019	\$125.000.000	Sin Fecha	\$0	\$99.999.200	\$99.999.200	\$25.000.800
15	2018129298-237-34 - 8/11/2018	\$80.000.000	7/04/2017	\$15.000.000	\$65.000.000	\$80.000.000	\$15.000.000
16	2018129298-244-58 - 23/12/2018	\$341.285.000	Sin Fecha	\$51.193.000	\$290.092.000	\$341.285.000	\$51.193.000
17	2018129298-260-171 - 22/02/2019	\$25.000.000	sin fecha	\$0	\$0	\$0	\$25.000.000
18	2018129298-268-185 - 5/03/2019	\$120.000.000	Sin Fecha	\$0	\$0	\$0	\$120.000.000
19	2018129298-265-178 - 26/02/2019	\$148.000.000	Sin Fecha	\$0	\$0	\$0	\$148.000.000
20	2018129298-253-179 - 27/02/2019	\$180.000.000	Sin Fecha	\$0	\$0	\$0	\$180.000.000
21	2018129298-247 - 056 Folio del 203 al 369	\$261.300.000	Sin Fecha	\$261.300.000	\$0	\$0	\$261.300.000
22	2018129298-254 - 056 Folio del 56 al 83	\$50.000.000	Sin Fecha	\$50.000.000	\$0	\$0	\$50.000.000
23	2018129298-243 - 056 Folio del 90 al 177	\$183.000.000	Sin Fecha	\$183.000.000	\$0	\$0	\$183.000.000
24	2018129298-267 - 056 Folio del 178 al 202	\$206.900.000	Sin Fecha	\$206.900.000	\$0	\$0	\$206.900.000
							\$1.437.204.200

La existencia de estas obligaciones más la información de los diez denunciados ante la Fiscalía comprenden el monto total de cuatro mil ciento treinta y un millones trescientos treinta y seis mil doscientos pesos (\$4.131.336.200) valor que contrastado con el patrimonio líquido según el último reporte por usted realizado ante la autoridad fiscal al año

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1380

DE 2019

0000 Hoja No. 21

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

2015¹⁴ supera considerablemente el 50% el valor del mismo, esto es setecientos diez millones ochocientos treinta y tres mil quinientos pesos (\$710.833.500).

Estas afirmaciones tienen asiento en los testimonios y declaraciones recibidas, las pruebas documentales aportadas por cada declarante, el registro de accionistas de la sociedad HOTELES GMF S.A.S., y la información aportada por la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, todo lo cual nos permitió identificar y comprobar la realidad económica de las operaciones por usted realizadas, que se traduce en haberse obligado con al menos veintiséis (26) acreedores respecto de quienes adquirió pasivos, en cuantía de al menos cuatro mil ciento treinta y un millones trescientos treinta y seis mil doscientos pesos (\$4.131.336.200).

Obligaciones que de acuerdo con las pruebas documentales aportadas por cada uno de los acreedores y que reposan en el expediente de la inspección, se encontraban vigentes al momento de expedición de la Resolución 0912 de 2019, situación que no ha sido desvirtuada de su parte, por lo que no son admisibles sus argumentos en el sentido de señalar que solo existen seis (6) obligaciones vigentes. En gracia de discusión, de la revisión de los argumentos señalados en el recurso por usted presentado, inicialmente informa que "solo el 12,5% tiene un saldo vigente" para posteriormente, cuando analiza el cuadro de acreedores presentado, refiere un porcentaje de acreedores con saldo del 23,08%, lo cual demuestra una inconsistencia que no se puede determinar, por cuanto no aportó prueba documental alguna de sus aseveraciones, como reiteradamente se ha puesto de presente.

Ahora, no encuentra este Despacho una concordancia argumentativa entre su renuncia expresa al derecho de defensa dentro de la actuación administrativa adelantada, con las causales por las que invoca la violación a este derecho, pues el aducir que no se le permitió "conocer de la queja y/o de los hechos de la misma para ejercer mi derecho de defensa y aportar la información permitida" no corresponde a la realidad, pues tal como se expuso en precedencia, esta Autoridad mediante oficio notificado personalmente le informó de la práctica de una actuación administrativa en su contra por el presunto ejercicio de actividades de captación no autorizada de recursos del público, documento¹⁵ en el que obra su firma en señal de recibido y del que recibió una copia íntegra de parte de la comisión de visita, que igualmente explicó el objetivo de la misma, sumado al documento del 21 de diciembre de 2018 a los que ya nos referimos, en donde manifiesta su voluntad de no aportar información a esta Superintendencia, actos que hoy no puede desconocer y más gravoso aún, usarlos para pretender demostrar un supuesto desconocimiento de la administración de sus derechos constitucionales.

En punto a lo anterior, conviene resaltar que el actuar con probidad, lealtad, honestidad, solidaridad y confianza, conforman el pilar de cualquier relación humana, lo que permite un adecuado orden social, y es el aseguramiento de este actuar el que persigue la buena fe como principio general fundamental del derecho, de ahí que la regla *venire contra factum proprium non valet* como expresión de ese principio, "está prevista como un mecanismo de protección de los intereses legítimos de determinados sujetos jurídicos, que obliga al otro a mantener un comportamiento coherente con los propios actos, habida cuenta de que la conducta de una persona puede ser determinante en el actuar de otra. Por ende, surge como una prohibición de actuar contra el acto propio¹⁶".

Así, la Corte Constitucional ha señalado sobre la regla de los actos propios, lo siguiente¹⁷:

"6. El respeto al acto propio

Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (art. 83 C.N). Principio constitucional, que sanciona entonces, como inadmisibles toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto.

¹⁴ Radicado 201819298-033 radicado el 7 de noviembre de 2018

¹⁵ Radicado 2018129298-55

¹⁶ Consejo de Estado, Sentencia 2013-00417 DE 02 DE MARZO DE 2017

¹⁷ Corte constitucional, Sentencia T 295 de 1999

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

La teoría del respeto del acto propio, tiene origen en el brocardo "*Venire contra pactum proprium nelli conceditur*" y, su fundamento radica en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. Esta buena fe quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria.

El tratadista y Magistrado del Tribunal Constitucional Español Luis Díaz Picazo enseña que la prohibición no impone la obligación de no hacer sino, más bien, impone un deber de no poder hacer; por ello es que se dice "no se puede ir contra los actos propios".

Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho.

El respeto del acto propio requiere entonces de tres condiciones para que pueda ser aplicado:

a. Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz

Se debe entender como conducta, el acto o la serie de actos que revelan una determinada actitud de una persona, respecto de unos intereses vitales. Primera o anterior conducta que debe ser jurídicamente relevante, por lo tanto, debe ser ejecutada dentro una relación jurídica; es decir, que repercuten en ella, suscite la confianza de un tercero o que revele una actitud, debiendo excluirse las conductas que no incidan o sean ajenas a dicha relación jurídica.

La conducta vinculante o primera conducta, debe ser jurídicamente eficaz; es el comportamiento tenido dentro de una situación jurídica que afecta a una esfera de intereses y en donde el sujeto emisor de la conducta, como el que la percibe son los mismos. Pero, además, hay una conducta posterior, temporalmente hablando, por lo tanto, el sujeto emite dos conductas: una primera o anterior y otra posterior, que es la contradictoria con aquella.

b. El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa, debido a la contradicción —atentatorio de la buena fe— existente entre ambas conductas.

La expresión pretensión contradictoria encierra distintos matices: por un lado, es la emisión de una nueva conducta o un nuevo acto, por otro lado, esta conducta importa ejercer una pretensión que en otro contexto es lícita, pero resulta inadmisibles por ser contradictoria con la primera. Pretensión, que es aquella conducta realizada con posterioridad a otra anterior y que está dirigida a tener de otro sujeto un comportamiento determinado. Lo fundamental de la primera conducta es la confianza que suscita en los demás, en tanto que lo esencial de la pretensión contradictoria, es el objeto perseguido.

c. La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas.

Es necesario entonces que las personas o centros de interés que intervienen en ambas conductas —como emisor o como receptor— sean los mismos. Esto es que tratándose de sujetos físicamente distintos, ha de imputarse a un mismo centro de interés el acto precedente y la pretensión ulterior".

Así, la teoría del acto propio requiere de tres requisitos para ser aplicado:

i) Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz. Esa primera conducta debe ser jurídicamente relevante y eficaz porque es el comportamiento que se tiene dentro de una relación jurídica que afecta unos intereses vitales y que suscita la confianza del destinatario de la conducta. Asimismo, debe haber una conducta posterior que sea contraria a la anterior.

ii) El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa debido a la contradicción entre la conducta anterior y la posterior, atentatoria de la buena fe existente entre ambas conductas. Esta nueva conducta, que en otro contexto resultaría lícita, en ese caso es inadmisibles por ser contraria a la primera conducta.

iii) La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas.

En el caso concreto, la manifestación de la DIAN en el sentido de que la actora, como garante, no tiene interés para recurrir en reconsideración el acto sancionatorio impuesto a su garantizado y, no obstante, posteriormente decidir el recurso, no constituye una afectación a la regla *venire contra factum proprium non valet* o teoría de los propios actos".

En tal sentido, se tiene que, con fundamento en el principio de la buena fe, a nadie le es permitido ir en contra de sus propios actos, máxime si los mismos fueron ejercidos en pleno uso de sus facultades legales, por lo que no es posible para usted sustentar sus argumentos de defensa adoptando una posición contraria de la asumida dentro de la actuación

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

administrativa adelantada, como lo es el pretender desconocer su renuncia expresa a la entrega de información y atención de la visita de inspección a este Órgano de Control.

Por ende, carecen de total sustento legal sus argumentos para sostener que *"la resolución adolece de una indebida motivación y/o carece de motivos fundados para adoptar la medida administrativa deprecada"*, pues respecto del defecto sustantivo aducido que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha denominado como falta de motivación de decisión judicial, se entiende que opera *"cuando la providencia respectiva carece de fundamento jurídico y fáctico que permita identificar las razones por las cuales la decisión ha sido adoptada"*¹⁸ pues contrario a lo aducido por usted sobre este punto, esta Superintendencia ha dejado plenamente probado tanto en el acto que se recurre como en el presente acto administrativo cada situación fáctica con su correspondiente medio de prueba, lo que permitió demostrar la configuración de los supuestos de captación no autorizada de recursos del público establecidos en el ordenamiento positivo vigente; situación diferente es que usted no comparta los motivos de esta Autoridad que actuó con total apego al mandato constitucional, lo que no se puede confundir con una ausencia de motivos fundados de la medida administrativa impuesta.

De otra parte, atendiendo sus afirmaciones en el sentido de señalar que *"con relación a los supuestos de captación se ha demostrado que las personas que entregaron los dineros lo hicieron de manera voluntaria e informada"*, conviene aclarar que el hecho que las personas que entregaron sus recursos en virtud de las operaciones que soportan la medida administrativa impuesta, hubieran aceptado entregar sus recursos voluntariamente y suscribir los documentos por usted solicitados, no tiene incidencia alguna para efectos de imponer por parte de esta Superintendencia la correspondiente medida administrativa luego de comprobarse una captación no autorizada de recursos del público, como aconteció en este caso.

Ahora bien, en lo relativo a su afirmación tendiente a calificar a sus acreedores como personas determinadas, la misma resulta en el mismo sentido de su línea argumentativa desprovista de todo asidero probatorio, pues no aporta medio de prueba alguno que sustente este supuesto fáctico, por el contrario esta Superintendencia si probó con los testimonios y declaraciones de las veinticuatro (24) personas que voluntariamente acudieron a este Ente de Control para aportar información y documentación sobre los hechos objeto de investigación, que las mismas no tenían una calidad específica, ni pertenecían a un grupo familiar, laboral o social que permita establecerlas en un escenario delimitado y determinado por lo que se entiende que son terceros innominados, pues se trataba de personas que tuvieran la voluntad y el capital para invertir en el mercado de valores, ocho de los cuales, como se señaló, obtuvieron la publicidad del brochure mediante el cual publicitaba la oferta de sus servicios..

Con todo, se tiene que usted asumió pasivos con al menos veintiséis (26) personas en cuantía de cuatro mil ciento treinta y un millones trescientos treinta y seis mil doscientos pesos (\$4.131.336.200), comprometiéndose devolver capital más intereses sin prever a cambio la entrega de un bien o servicio, monto que supera el 50% de su patrimonio líquido, configurando así los supuestos de captación no autorizada de recursos del público previsto en el numeral 1 del artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 y en el Decreto 4334 de 2008, tal como quedó demostrado en la Resolución 0912 que se recurre, situación que no fue desvirtuada por usted en la reposición.

Con todo, este Despacho no acoge ninguno de los fundamentos de hecho ni de derecho invocados en el recurso interpuesto, los cuales fueron abordados por esta Autoridad en su totalidad en el presente acto administrativo.

SEXTO. Que las consideraciones expuestas en precedencia recogen las conclusiones y resultados del análisis que llevó a cabo esta Superintendencia frente a cada uno de los motivos de inconformidad planteados en el recurso que se analiza contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019, sin que se encuentren argumentos válidos y ciertos, ni elementos probatorios que desvirtúen las motivaciones que le sirvieron de fundamento para ordenar la medida de intervención señalada en su contra, por lo cual, procede confirmar la Resolución 0912 de 2019.

¹⁸ Sala Quinta de revisión de tutelas de la Corte Constitucional Sentencia T -233/2007

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1380 DE 2019

Hoja No. 24

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019 mediante la cual se adoptó una medida administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 0912 del 10 de julio de 2019, mediante la cual esta Superintendencia impuso una medida administrativa por captación no autorizada de recursos del público respecto del señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO identificado con C.C. 79.801.072.

ARTÍCULO SEGUNDO. COMUNICAR la presente Resolución a la Superintendencia de Sociedades, para los fines propios de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO. COMPULSAR copias de la presente Resolución a la Fiscalía General de la Nación para los fines pertinentes en las investigaciones de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. ORDENAR la publicación de la parte Resolutiva de este acto administrativo en un diario de circulación nacional, indicando que se trata de una operación de captación o recaudo no autorizado de dinero del público en forma masiva. Lo anterior de acuerdo con lo previsto en el párrafo 1º del numeral 1º del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

ARTÍCULO. QUINTO. ORDENAR la publicación de la presente Resolución en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera y en la página Web de esta última Entidad.

ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR PERSONALMENTE O SUBSIDIARIAMENTE POR AVISO según lo establecido en el numeral 4º del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, aplicable por remisión expresa del artículo 15 del Decreto 4334 de 2008, al señor GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de la misma, y advirtiéndole que contra ella no procede ningún recurso, quedando agotada la vía administrativa.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D. C., a los **10 OCT 2019**

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO Y TRANSPARENCIA, (E)

JOSE CAMILO TORRES DUQUE